

Chihuahua, Chihuahua, siendo las doce horas con treinta minutos del día al rubro indicado, reunido en Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en sus instalaciones, ubicadas en Paseo Simón Bolívar 712, primer piso, Colonia Centro, C.P. 31000, al tenor de las siguientes:

## CONSIDERACIONES

**Primero.- [Competencia]** Este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado es competente para resolver en torno a la clasificación de información que realicen los titulares de áreas administrativas de éste Sujeto Obligado, conforme a lo dispuesto por los artículos 5 fracciones V y XX, 32 fracción I, 33, fracciones I, XI y XXII, 35, 36, fracciones III, VI, VIII y XV, 38, fracciones II, VI y IX, 40, 60, 109, 110, 111, 112, 117 fracción I y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; Lineamientos Primero, Segundo, fracciones I, II, VII, XII, XIII, XV, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, fracción I, y Octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**Segundo. - [Análisis]** En fecha veinticuatro de septiembre del año 2024, se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Chihuahua, una Solicitud de Acceso a la Información registrada con folio **080139723000772**, en la que se solicitó:

«1.- Solicito conocer la cantidad de licencias, usuarios o cuentas para acceder o utilizar el sistema eTrace con las que se cuenta actualmente en 2024. 2.- También solicito saber conocer cuantas armas de fuego fueron aseguradas en su entidad han sido cotejadas a través de la plataforma eTrace o por cualquier otro método con el Departamento de Alcohol, Tabasco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Sobre las armas cotejadas solicito toda información disponible, incluyendo: marca, modelo, calibre, número de serie, país de fabricación, país donde el arma fue adquirida originalmente, y si el arma fue utilizada fue utilizada en la comisión de un delito. 3.- Indicar, si en cualquier momento entre 2024 y hasta el año 2014 esta entidad contó con algún acceso a dicho sistema. 4.- En caso de ya no contar con el acceso al sistema eTrace, indicar la razón de su cancelación. 5.- La cantidad de rastreos que esta Fiscalía ha solicitado entre 2021 y 2024, desagregando la información por armas largas y cortas, así como por entidad federativa de aseguramiento.» (sic). (Énfasis propio)

**Tercero.- [Búsqueda y localización de la Información]** En cumplimiento a lo establecido por los artículos 36 fracciones II, VI y IX, y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el Encargado de la Unidad de Transparencia turnó mediante oficio: **FGE-4C.5/1/1/1104/2024** a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, para que manifestara lo procedente, o bien realizaran una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, dando respuesta por las citadas áreas. Lo anterior, toda vez que de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento es el área competente de atender los planteamientos vertidos en la solicitud citada.

**Cuarto. - [Determinación de la Clasificación]** La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses mediante oficio **FGE-6C.ZC.19.JP.02.417/1/1/00786/2024** hace del conocimiento, que referente a la solicitud **080139723000772** contiene información clasificada como reservada por derivar de las

investigaciones realizadas por el Ministerio Público, al tenor de lo establecido en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 218 del Código nacional de Procedimientos Penales y 124 fracciones XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que solicita al Comité de Transparencia se pronuncie y confirme la clasificación realizada, en los siguientes términos:

“...Me permito solicitarle a usted, en base a la solicitud de información indicada con anterioridad que la información se clasifique como reservada, en relación a la información de armas de fuego, en cuanto a “Marca, modelo, calibre, número de serie, país de fabricación, país donde el arma fue adquirida originalmente” ya que no es posible contestar dicha información debido a que tiene carácter de reservada por encontrarse en las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y se tramitan ante el ministerio público, y proporcionarla podría afectar gravemente la persecución del delito que se sigue de las mismas; así como por disposición expresa de una ley; lo anterior de conformidad con el artículo 124 fracciones XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública del Estado de Chihuahua...” (Sic)

**Quinto. - [Procedencia de la Clasificación]** Con base a lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se procede al análisis de las razones, motivos y circunstancias que llevan a determinar la clasificación de la información como reservada. Se invocaron como causales de reserva lo que se establece en el artículo 124 fracciones XI y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, mismas que a la letra disponen:

«**ARTÍCULO 124.** Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación:  
I a X (...)»

**XI.** Se encuentre dentro de **las investigaciones de hechos** que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

**XII.** Las que **por disposición expresa de una ley tengan tal carácter**, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.» (énfasis propio)

De conformidad a lo que se establece en el artículo 120 de la misma ley y en relación a los «Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas», para el caso que nos ocupa son aplicables los numerales **Trigésimo primero** y **Trigésimo segundo**, que a la letra establecen:

«**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación**, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.» (énfasis propio).

Esta fracción se relaciona con la fracción **XI** del artículo **124** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

**«Trigésimo segundo.** De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado Mexicano sea parte, **le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.**

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter. » (énfasis propio).

3

Esta fracción se relaciona con la fracción XII del artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

**Sexto. [Prueba del daño]** En base en el análisis, respecto a las hipótesis de excepción invocadas por la Dirección General Jurídica, éste Comité de Transparencia analiza la clasificación de la información como **reservada**, y para efectos de la solicitud de acceso a la información pública, establecida por el artículo 124, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y el numeral **Trigésimo primero**, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

#### **Prueba de daño.**

Se determina que la información requerida encuadra en el supuesto normativo ya citado, por lo que a continuación se presenta la prueba de daño para la referida hipótesis, reservando dicha información:

- a) **Riesgo real, demostrable e identificable:** Dar a conocer la información referente «al número de serie» permitiría individualizar e identificar un arma de fuego, además de que se estaría proporcionando información que obra en las Carpetas de Investigación o causas penales a cargo del Ministerio Público, integradas por hechos que se consideran como delito en la legislación penal del Estado, pondría en riesgo las investigaciones que se encuentran en trámite, y se afectaría la reserva y secrecía necesarias para el desahogo de las actuaciones y probanzas, que en este caso, guardan relación con indicios para el esclarecimiento de hechos delictivos y para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra imputados, y la reparación del daño y en ese sentido, proporcionarlo puede afectar las investigaciones en perjuicio de los Sujetos del Procedimiento Penal.

En ese sentido, al corresponder información que se relaciona con la investigación de hechos delictivos en la cual hay líneas de investigación en contra de personas probablemente responsables de los mismos, y de las que se desprenden indagatorias en trámite e información de otra naturaleza por ser hechos derivados sobre diversas zonas geográficas que tiene competencia esta Fiscalía General del Estado como Institución de Investigación y Persecución del Delito; en ese sentido de darse a conocer y difundir la información a terceros ajenos al procedimiento penal de los cuales versan a la materia penal, de carpetas de investigación o causas penales a cargo del Ministerio Público, representa un riesgo para la continuidad de las causas penales e impide que alcance su fin constitucionalmente válido y de interés general de investigar delitos y, con ello, los objetivos del proceso penal, el derecho humano de acceso a la justicia, permitir el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas indirectas, procurar que el o los culpables no queden impunes y que los daños causados por los delitos se reparen, así como reprimir que se sigan cometiendo delitos en contra de personas determinadas o indeterminadas. En ese sentido, la institución del Ministerio Público debe de tomar todas las medidas necesarias para el resguardo de la información producto de las actividades de investigación o

persecución del delito ante los tribunales, por lo que divulgar la información en los términos solicitados menoscaba la capacidad del Ministerio Público para conducir de forma adecuada las investigaciones.

Si se publicara la información solicitada se correrían diversos riesgos que pondrían en peligro la continuidad de la investigación y la eventual reparación del daño. Además, de que se permitiría que el o los probables responsables se sustrajeran a la acción de la justicia, con el riesgo de que este o estos destruyeran, alteraran u ocultaran los indicios o pruebas, intimidaran, amenazaran o influenciaran a los servidores públicos. En última instancia, todo ello podría representar un obstáculo insalvable para la continuación de las investigaciones en curso, de modo que se impediría que el Ministerio Público cumpliera con su función constitucional de investigar delitos y ejercitar la acción penal.

- b) **Perjuicio que supera el interés público:** Las investigaciones bajo la dirección y mando del Ministerio Público y el ejercicio de la acción penal fundamentadas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte objeto de esta solicitud de información está a cargo de la Institución del Ministerio Público siendo competente para las solicitudes, producto de las investigaciones en trámite de los múltiples delitos.

Por lo tanto, la víctimas que recienten el daño y la sociedad en general son quienes se benefician de que el Ministerio Público lleve a buen término, con el debido sigilo las investigaciones de los delitos y ejercite la acción penal. Estos beneficios, que llegan a aquellos, incluyen la reparación del daño que causa ese tipo de conductas antisociales y la recuperación del ejercicio de los derechos fundamentales que se hubiesen reprimido, solo podrían alcanzarse al guardar la reserva de la información que marca la ley. Por lo tanto, hay un interés superior de la sociedad en que se reserve la información para que la Institución del Ministerio Público concluya la investigación, respecto al interés de un particular en conocer esos datos, cuya publicación pone en riesgo la continuación de la investigación y el éxito de estas.

- c) **Principio de proporcionalidad y el medio menos restrictivo:** El que la información este reservada le permitiría al Ministerio Público cumplir con sus fines constitucionalmente válidos, apegándose al principio de proporcionalidad, resulta ser el medio más idóneo para proteger los actos que conllevan alcanzar los fines del proceso penal. La reserva de la información protege el fin constitucionalmente válido del Ministerio Público, que es correlativo al derecho humano de acceso a la justicia y, de ese modo, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el o los culpables no queden impunes y reparar los daños causados por los delitos.

La reserva de la información requerida en la solicitud de Acceso a la Información Pública no implica una restricción a dicho derecho de acceso a la información pública, dada la naturaleza de esa información, su reserva es proporcional porque atiende la importancia de la protección del interés jurídico que se tutela con la probable comisión de los delitos investigados (el funcionamiento normal y ordenado de la Administración de Procuración de Justicia y la Seguridad Pública) y del interés general que hay en que se cumpla el proceso penal en las investigaciones de los delitos, que permite, entre otras cosas, la reparación del daño y el restablecimiento de garantías de no repetición. En conclusión, es claro que el resguardo de la Información producto de la investigación del delito es de interés general. La divulgación de información de las investigaciones ignoraría ese interés.

Por lo anterior, se advierte un nexo causal entre la entrega de la información requerida y afectaciones a la debida diligencia que rige el actuar del Ministerio Público y al interés general que se alcanza con

él. Así, no hay justificación para vulnerar esos principios frente al derecho a la información del solicitante.

Finalmente, se surte la causal de reserva contenida en el **artículo 124, fracción XII** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en relación al numeral **Trigésimo segundo**, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas:

5

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se precisa lo siguiente:

*«Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

*El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial*

*...  
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.» (Énfasis propio).*

Código Nacional de Procedimientos Penales

*«Artículo 218. Reserva de los actos de investigación*

*Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. (...) .» (Énfasis propio).*

De las normas citadas, se observa que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos y que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, y debe estar protegida en los términos y con las excepciones por razones de orden público fijados por la ley, que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, es decir, que la seguridad pública comprende tanto sus fines lícitos como la imposición de sanciones fijadas en las leyes expedidas por el legislador.

Por otro lado, si se difundiera la información citada, se podrían causar sanciones tanto administrativas como penales, a los servidores públicos al proporcionar información respecto a las carpetas de investigación o causas penales, como lo solicita el requirente de la información, en los términos solicitados, por lo que se cita a continuación dada su pertinencia, lo siguiente:

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mismo que establece:

«**Artículo 65.** Para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de **legalidad**, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los **Integrantes se sujetarán a las siguientes obligaciones:**

I a XIII (...)

**XIV. Preservar**, conforme a las disposiciones aplicables, **las pruebas e indicios** de hechos presumiblemente delictivos o de faltas administrativas, de forma que **no pierdan su calidad probatoria** y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente.

**XV.** Abstenerse de disponer de los **bienes asegurados** para beneficio propio o de terceros.

XVI a XIX (...)

**XX. Abstenerse de ocultar, sustraer, alterar o revelar**, a quien no tenga derecho conforme a las disposiciones aplicables, **documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada** o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su función, cargo o comisión.» (Énfasis propio).

Código Penal del Estado de Chihuahua:

«**Artículo 252.** Además de las penas previstas para el o los delitos cometidos, se impondrán, según corresponda:

I. **Suspensión** del empleo, cargo o comisión en el servicio público de dos meses a un año;

II. **Destitución** del empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. **Inhabilitación** de tres a quince años para obtener y desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público; y

IV. **Decomiso** de los productos del delito. » (Énfasis propio).

«**Artículo 253.** Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público quien:

I a III. (...)

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, **utilice o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión;**

V a VI. (...) (Énfasis propio).

«**Artículo 288.** Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, al servidor público que:

I a IX. (...)

X. **Dé a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obre en una investigación o proceso penal y que por disposición de la ley sean reservados o confidenciales.»** (Énfasis propio).

Ley General de Responsabilidades Administrativas:

«**Artículo 49.** Incurrirá en **Falta administrativa** no grave el servidor Público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

V. Registrar, integrar, **custodiar y cuidar la documentación e información** que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, **divulgación**, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.» (Énfasis propio).

## Prueba de daño.

Robustece lo anterior, lo señalado en el artículo 112 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública, en el caso de restringir el acceso a la información por ubicarse dentro de los supuestos de clasificación de la información, se señalen las razones, motivos o circunstancias que llevan a reservar la información, señalando a continuación la prueba de daño:

- a) **Riesgo real, demostrable e identificable:** El difundir la información referente «al número de serie» contravendría inclusive los derechos humanos previstos en la Constitución Federal, así como las leyes que de esta emanan, prevén expresamente que todas las investigaciones resultan de naturaleza estrictamente reservada e inclusive que toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos, sea sancionada, trayendo consigo la comisión del delito de Ejercicio Ilegal del Servicio Público y/o delito en Contra del Adecuado Desarrollo de la Justicia Cometidos por Servidores Públicos, aludidos en los artículos 253 fracción IV y 288 Fracción X del Código Penal del Estado de Chihuahua, así como incurrir en faltas administrativas previstas en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la diversa sanción no grave, prevista en el artículo 49, fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- b) **Perjuicio que supera el interés público:** La reserva de la información declarada por esta institución de procuración de justicia, supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que dicha imposibilidad jurídica atiende a las disposiciones normativas. En consecuencia, la finalidad del legislador en considerar a la carpeta de investigación como un documento estrictamente reservado, es una medida que pretende salvaguardar el sigilo en las investigaciones y la garantía del debido proceso, por lo que la restricción legislativa persigue un fin constitucionalmente legítimo.

Y con ello adicionalmente garantizar el respeto a los derechos humanos que se ven involucrados en la investigación de los delitos, así como la función ministerial del sigilo de investigación como herramienta para alcanzar el fin del proceso penal y garantizar el éxito de la investigación.

Por lo tanto, la reserva que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que da pie a citar otras disposiciones jurídicas, permite que la institución del Ministerio Público a cargo de las investigaciones se concentre en llevar a cabo su función constitucional de investigación y persecución de los delitos por lo que en caso contrario se abriría el camino a aplicar sanciones; a fin de que se cumplan los objetivos del sistema de justicia penal y que sus beneficios redundan en toda la sociedad, la revelación de la información por el interés de un particular en conocerla, lo distrae de dicho objetivo.

- c) **Principio de proporcionalidad y el medio menos restrictivo:** La reserva solicitada, representa el medio menos restrictivo al derecho de acceso a la información, debido a la naturaleza de la información solicitada resulta proporcional a la obligación de resguardo a la información contenida en las indagatorias, las cuales revisten el carácter de reservada de conformidad con la normativa anteriormente citada, y así salvaguardar el sigilo y la secrecía de las investigaciones a fin de garantizar la procuración de justicia de manera eficaz frente al interés de un solo individuo.

En consecuencia, la información solicitada respecto a la identificación de las armas de fuego aseguradas, son producto de las diligencias ordenadas por la Representación Social y que de acuerdo a la normativa antes referida, es de mayor beneficio que se siga las indagatorias sin injerencias de agentes externos, a que prevalezca su divulgación con el fin de conocer detalles sobre hechos delictivos relacionados con cadáveres localizados, pues se insiste que, dar a conocer datos de las

indagatorias como el **número de serie**, » entorpecería las actividades de investigación y persecución del delito que realiza el Ministerio Público, se concluye que existe un impedimento legal para que se difunda información y en el caso particular, proporcionar la información en los términos solicitados pone en riesgo la obligación de preservar estos datos en perjuicio de las partes involucradas.

**Séptimo.** - Del análisis integral de las causales de reserva y de los lineamientos que rigen en la materia se puede concluir que: **se acreditan plenamente las causales de excepción**. En consecuencia, para el caso concreto si se proporcionará la información en los términos requeridos se entorpecen las funciones que en materia de procuración de justicia tiene encomendadas éste Sujeto Obligado.

Por lo que, en lo referente a éstas causales la aplicación de la prueba de daño, que dispone el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, queda plenamente colmada, toda vez que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable porque menoscaba las capacidades del Ministerio Público respecto a la persecución de los delitos, lo que es un interés social superior. Por lo que se constituye como el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio.

Se cumple también con lo establecido en el numeral Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en relación a la aplicación de la prueba del daño la reserva de la información se encuentra plenamente justificada toda vez que se señalaron los artículos y sus fracciones tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sustentan la clasificación de la información reservada.

Por lo tanto, la clasificación de la información reservada, respecto a lo requerido mediante la Solicitud de Acceso a la Información **080139723000772**, referente a la **«marca, modelo, calibre, número de serie, país de fabricación, país donde el arma fue adquirida originalmente»**, constituye una limitación que se ajusta al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar un perjuicio en detrimento de las funciones del Ministerio Público.

**Octavo.** - El Derecho de Acceso a la Información es un Derecho Humano, que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. No obstante, es un Derecho que se encuentra limitado, tanto por los intereses nacionales y de la sociedad, como por los derechos de terceros. Criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como puede leerse en la siguiente tesis jurisprudencial:

**«DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.<sup>1</sup>**  
*El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal*

<sup>1</sup> Época: Novena Época. Registro: 191967. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. LX/2000. Página: 74



no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.»

9

En este punto es importante destacar que resulta procedente la clasificación de la información con carácter de reservada, en caso contrario, se pondría actualizar un daño, pérdida, lesión u otras consecuencias adversas que pudieran ocurrir como resultado de verter información a personas ajenas sin interés jurídico o legítimo alguno. En ese tenor se debe realizar una valoración armónica de todas las circunstancias que existen a efecto de poder clarificar los elementos que sustentan la clasificación; es decir, se desarrollaron las líneas argumentativas mínimas que deben cursarse. Se aportaron elementos sólidos en la ponderación de la restricción impuesta en el presente acuerdo, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado:

**«PRUEBA DE DAÑO EN LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SU VALIDEZ NO DEPENDE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE EL SUJETO OBLIGADO APORTE.<sup>2</sup>** De acuerdo con el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los lineamientos segundo, fracción XIII y trigésimo tercero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, la prueba de daño es la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados para acreditar que la divulgación de la información lesiona un interés jurídicamente protegido y que el daño que puede producir es mayor que el interés de conocer ésta. Para tal efecto, disponen que en la clasificación de la información pública (como reservada o confidencial), debe justificarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; que ese riesgo supera el interés público general de que se difunda; y, que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. Así, la prueba de daño establece líneas argumentativas mínimas que deben cursarse, a fin de constatar que la publicidad de la información solicitada no ocasionaría un daño a un interés jurídicamente protegido, ya sea de índole estatal o particular. Por tanto, al tratarse de un aspecto constreñido al ámbito argumentativo, la validez

<sup>2</sup> Décima Época. Núm. de Registro: 2018460. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.10o.A.79 A (10a.). Página: 2318

*de la prueba de daño no depende de los medios de prueba que el sujeto obligado aporte, sino de la solidez del juicio de ponderación que se efectúe en los términos señalados.» (Énfasis propio).*

**Noveno. - [Plazo de Reserva].** Respecto a la clasificación de la información con carácter de reservada el plazo de reserva es por **cinco años**, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, por lo que éste Comité de Transparencia tiene como actualizadas la causales de reserva tanto en su concepción genérica y específica en la aplicación de la prueba del daño y el plazo de reserva referida al caso, y de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se estima que la justificación del plazo de reserva, queda colmada y se concreta; aunado a que tal como lo señaló la Representación Social, es información reservada la cual no es posible darla a conocer, ya que en su caso, su divulgación podría afectar gravemente el éxito de las investigaciones en curso y las diligencias realizadas, y las posteriores, las cuales son de tracto sucesivo y concatenadas una con otras sin estar sujetas a temporalidad o vigencia alguna; si se diera a conocer el caudal probatorio, se vulnerarían la persecución de los delitos que se siguen dentro de las carpetas de investigación a cargo del Ministerio Público mediante el ejercicio de la acción penal, con el riesgo inminente de destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los servidores públicos; es decir, todos los registros y documentos contenidos en la indagatoria, se encuentran reservados por ministerio de Ley por cuestiones de seguridad y orden público, dadas las características que guardan los datos de prueba, dichos registros o base de datos configuran información materia de investigación; además de considerar finalmente de conformidad con el quinto párrafo del número 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, sin que pueda ser mayor a tres años ni mayor a doce años por lo que tampoco se está en dicho supuesto para proporcionar la citada información, en consecuencia el plazo de cinco años establecido en el presente acuerdo, es adecuado a las disposiciones sustantivas y adjetivas que se citan y los argumentos esgrimidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado emite el siguiente:

## ACUERDO

**Primero. - Se confirma la Clasificación de información como Reservada de la solicitud 080139723000772 referente al «número de serie», por un período de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo.**

**Segundo. - El presente Acuerdo de Clasificación entrará en vigor al momento de su aprobación.**

**Tercero. - Se instruye al Encargado de la Unidad de Transparencia para que en el ámbito de sus atribuciones realice las notificaciones correspondientes al solicitante.**

**Cuarto.** - Remítase a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses un tanto del presente acuerdo a efecto de que lo resguarde en su índice de expedientes de clasificación, lo anterior con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.

Así lo acordó, por unanimidad, el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, el día 15 de octubre del año dos mil veinticuatro. Los miembros del Comité presentes, firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.

**Comité de Transparencia**

Presidente

Lic. Martín del Ángel Ramos Gastelum

Secretaria

Lic. Rubi Mariñelarena Guevara



**FISCALÍA GENERAL DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Vocal

Lic. Stephanie Muñoz Rodríguez

